



AGUA Y SANEAMIENTO

LA PRIVATIZACION NO ES UN MEDIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ODS 6

Meera Karunanathan

July 2018



Internacional de Servicios Públicos (ISP) es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadoras y trabajadores que prestan servicios públicos en 150 países. La ISP defiende los derechos humanos, promueve la justicia social y el acceso universal a servicios públicos de calidad. La ISP trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones.

Blue Planet Project (BPP) (*Proyecto Planeta Azul*) es parte de un movimiento global, con socios de todo el mundo que promueve la verdad fundamental de que “El agua es vida.” Nuestro objetivo: es proteger el agua como recurso vital y garantizar que se gestione públicamente para que esté disponible para todo el mundo a un precio razonable, públicas.

AGUA Y SANEAMIENTO

LA PRIVATIZACION NO ES UN MEDIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL ODS 6

por Meera Karunanathan - Blue Planet Project

Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente la posición de los editores.

Julio de 2018

Agradezco a las siguientes personas por sus aportes y contribuciones al informe:

Marie-Luise Abshagen (FUE), Anna Cavazzini (Bread for the World), David Boys (ISP),

Robert Ramsey (CUPE) and Sandra Vermuyten (ISP).

Fóto de tapa ©Shutterstock.com/Fivepointsix





Foto: Presa vacía cerca de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. ©Shutterstock.com/fivepointsix

A principios del año 2018, las noticias sobre una dramática sequía en Ciudad del Cabo inundaron los titulares de todo el mundo, seguidas de advertencias de los analistas de que varias otras regiones pronto enfrentarían una situación similar. El discurso de la ciudad sobre las soluciones giró en torno a temas relacionados a innovaciones tecnológicas y medidas punitivas que pondrían un freno al consumo de agua en los hogares. Patricia de Lille, alcaldesa de Ciudad del Cabo, reprendió a los capetonianos por su comportamiento negligente y amenazó con “obligar a las personas en lugar de pedirles” ahorrar agua. En una ciudad donde el 25 por ciento de la población no tiene acceso al servicio de agua corriente en sus hogares, hubo muy poca discusión sobre las enormes inequidades después del apartheid.

Como respuesta, los residentes, incluyendo muchos provenientes de los barrios más pobres de la ciudad, formaron rápidamente una coalición llamada Cape Town Water Crisis Coalition (Coalición por la Crisis del Agua en Ciudad del Cabo) para contrarrestar las medidas de conservación total del agua que tendrían impactos sociales profundamente desiguales. El grupo puso énfasis en este mensaje al protestar contra la planta de Coca Cola, demandando que la corporación redujera a la mitad los 530 millones de litros que extrae anualmente de la ciudad para producir sus bebidas.¹

Ya sea lidiando con la sequía, el estado de los servicios de agua y saneamiento, o con los modelos más adecuados para la gestión del recurso hídrico; la historia de Ciudad del Cabo nos muestra que si la discusión no se centra en las profundas desigualdades en el acceso al agua y en sus causas fundamentales, las soluciones universales amenazan con empeorar la situación para las poblaciones más marginadas del mundo, a quienes la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con sus Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) promete no dejar atrás.

INTRODUCCION

La ambición y amplitud de la Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas ha sido objeto de elogios y burlas. Algunos se han burlado del gran número de iniciativas, describiendo al plan de 17 objetivos y 169 metas como la agenda para “no dejar ninguna meta atrás.”² Además el plan de desarrollo global fue producido por una variedad de actores con agendas conflictivas y puntos de vista opuestos. Durante todo el proceso, muchos grupos de la sociedad civil denunciaron que el imperativo del crecimiento económico, destacado en la agenda de los ODS, socavaría los objetivos relacionados con la justicia social y los derechos humanos, así como a los relacionados al medio ambiente.

La Red Europea Deuda y Desarrollo (Eurodad) ya ha declarado que “no estamos encaminados a cumplir las metas de los ODS.” Sin embargo, en lugar de cancelar la agenda de los ODS, grupos como Eurodad y la Internacional de Servicios Públicos (ISP) hacen un llamado para que los objetivos ambiciosos de poner fin a la pobreza y al hambre mientras se combate la desigualdad, se protege al medio ambiente y se alcanza la paz mundial, se cumplan con estrategias de implementación igualmente ambiciosas que extirpen de raíz las causas sistémicas. Este informe examina los desafíos que enfrenta la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre el agua, el ODS 6, y las estrategias audaces que se necesitan para superarlos.

El ODS 6 hace un llamado a los Estados miembros para “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”³ Como resultado de una campaña mundial por parte de las organizaciones que trabajan por la justicia hídrica durante el proceso de consulta de los ODS, los objetivos relacionados con el agua potable y el saneamiento son audaces en su aspiración de acceso universal y claros en su articulación de objetivos e indicadores sociales y de derechos humanos. Esto representa una mejora significativa con relación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio que apuntan a reducir a la mitad la población que no tiene acceso “mejorado” al agua potable y saneamiento.

El ODS 6 hace un llamado a los Estados miembros para “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.”

Sin embargo, cuando se trata de la gestión de los recursos de agua dulce, el ODS 6 reduce una amplia gama de temas complejos a una serie de metas e indicadores descontextualizados. Al hacerlo, oscurece las jerarquías y las dinámicas de poder que producen un acceso desigual al agua en lugares como Ciudad del Cabo. La ambigua lista no identifica los factores que ha mantenido el flujo de agua, incluso en las regiones con mayor escasez de agua, hacia unos pocos sedientos y poderosos, como Coca Cola, mientras a millones se les niega su parte justa. Ciudad del Cabo sirve como una moraleja. Para mantenerse fiel a su visión de “no dejar a nadie atrás”, estas dinámicas de poder deben ser desafiadas y no reforzadas a través de estrategias de implementación. Para hacerlo, los ODS deben romper con una larga historia de políticas hídricas neoliberales promovidas a través de procesos de desarrollo global desde los años noventa.

La participación activa del Banco Mundial en los procesos oficiales destinados a apoyar la implementación del ODS 6 plantea una amenaza a esta visión. Durante décadas, el Banco Mundial y otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) han llevado a cabo esfuerzos concertados para promover diversas formas de privatización. Entre las estrategias de implementación anheladas por el Banco Mundial se encuentran la financiación privada y la participación de las empresas en la formulación de políticas a través de distintos actores interesados. Estas estrategias han sido repetidas por ONU-Agua y otros organismos multilaterales, incluido un “Panel de Alto Nivel sobre Agua” creado a iniciativa del Banco Mundial en colaboración con el Secretario General de las Naciones Unidas.

ALIANZAS COMO UNA FORMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL ODS 6

En las últimas tres décadas, el Banco Mundial ha desempeñado un rol crucial en la creación de mecanismos para llevar a las corporaciones a la mesa de formulación de políticas. Esto coincidió con una erosión progresiva del espacio de formulación de políticas hídricas en los Estados, particularmente en el Sur Global a través de una serie de elementos que incluyen programas de ajuste estructural y mecanismos de resolución de disputas inversionista-estado que obligaron a los gobiernos a priorizar el interés de los donantes e inversionistas extranjeros en sus decisiones políticas por sobre las poblaciones locales.

Desde la década los setenta, los gobiernos han estado batallando con el dilema de cómo lidiar con los conflictos de intereses entorno al acceso al agua. En 1977, las Naciones Unidas celebró una conferencia en Mar del Plata, Argentina, para analizar el estado de los recursos hídricos y establecer normas comunes para la gestión de la cantidad, calidad y asignación de agua dulce. La declaración de Mar del Plata reconoció la importancia de la propiedad pública de las fuentes y proyectos de agua.

No fue sino hasta la Conferencia Internacional de 1992 sobre Agua y Medio Ambiente celebrada en Dublín que el agua se definió oficialmente como un “bien económico”⁴ a ser valorado a través de mecanismos de mercado. La conferencia finalizó con una declaración que luego se presentó a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) que se celebró en Río de Janeiro en junio del año 1992 (20 años más tarde en su proceso de seguimiento conduciría a los ODS)⁵.

Durante la época de la conferencia de Dublín, el Banco Mundial se convirtió en un jugador mucho más poderoso dentro del sistema de desarrollo de la ONU.⁶ El Banco Mundial y otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) ya habían comenzado a influir en las reformas políticas en el Sur Global mediante condicionamientos a los préstamos en los años ochenta. Los programas de ajuste estructural orientados a la liberalización del comercio, la desregulación y las medidas de privatización se estaban aplicando a cambio de préstamos del Banco Mundial y el Fondo Monetario

“el Foro Mundial del Agua no es un espacio legítimo para la formulación de políticas. Es una feria comercial organizada por el Consejo Mundial del Agua, un consorcio de múltiples actores que promueve soluciones a la crisis del agua que sirven a los intereses de las empresas multinacionales.”

Maude Barlow

Internacional (FMI).⁷ La conferencia de Dublín reforzó esta agenda al proclamar un consenso casi global para la mercantilización del agua formulada dentro de una retórica de sostenibilidad ambiental y equidad de género para adaptarse al espíritu de la época.

La gestión integrada de los recursos hídricos -dogma fundamental de los Principios de Dublín- a menudo fue impuesta por las IFI y los organismos donantes internacionales para mover la gobernanza del agua de los órganos estatales a organismos múltiples interesados. Este fue el caso en India donde el modelo priorizó el uso comercial del agua por sobre otros usos de subsistencia, a menudo excluyendo a los agricultores de subsistencia, grupo compuesto predominantemente por mujeres, a pesar del supuesto compromiso con la igualdad de género.

La conferencia de Dublín también dio nacimiento al Consejo Mundial del Agua, una plataforma de diversos organismos, que reúne a las corporaciones multinacionales⁸ junto con los gobiernos y las IFI para deliberar sobre cuestiones globales de política hídrica en el Foro Mundial del Agua que se celebra cada tres años. La conferencia, que permite a las empresas de la industria del agua impulsar propuestas de políticas y negociar acuerdos con ministros y Jefes de Estado, se ha enfrentado desde sus inicios a una feroz oposición por parte de los movimientos sociales. Maude Barlow, una de las críticas más abiertas del Foro Mundial del Agua, dice: “el Foro Mundial del Agua no es un espacio legítimo para la formulación de políticas. Es una feria comercial organizada por el Consejo Mundial del Agua, un consorcio de múltiples actores que promueve soluciones a la crisis del agua que sirven a los intereses de las empresas multinacionales.”⁹

En el año 2007, la participación de las empresas en la formulación de políticas adquirió una nueva dimensión cuando la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial lanzó el Grupo de Recursos Hídricos 2030 (2030 WRG) en el Foro Económico Mundial en Davos. El 2030 WRG es un consorcio de políticas públicas y privadas que involucra a IFIs, organismos de ayuda multilaterales y algunas de las corporaciones multinacionales más grandes del mundo, incluidas Nestlé y Coca-Cola, que trabajan junto con un número cada vez mayor de países para redactar políticas hídricas. Las corporaciones involucradas en conflictos hídricos como Pepsi y Coca Cola en India¹⁰ repentinamente obtienen un sitio en la mesa de toma de decisiones.

Las políticas neoliberales del agua se definen en este informe como procesos que permiten la apropiación del agua para la riqueza privada, incluida la privatización de los servicios de agua y saneamiento, la mercantilización del agua en productos como el agua embotellada o la transformación de las fuentes de agua en bienes capitales.

Las estrategias hídricas nacionales hasta ahora han sido desarrolladas por el 2030 WRG para Sudáfrica, India, México, China, Tanzania, Jordania, Mongolia y Perú. La plataforma de políticas públicas y privadas también funciona a nivel sub-nacional, incluso en las regiones con estrés hídrico como Karnataka, Maharashtra y San Pablo. Curiosamente, la mayoría de los Estados miembros involucrados en el Panel de Alto Nivel sobre Agua HLPW por sus siglas en inglés también están involucrados en el 2030 WRG: México, Perú, Bangladesh, Sudáfrica y Jordania.

En el año 2006 en México, un intento de impulsar a través de la legislatura un marco nacional de agua elaborado por el 2030 fracasó debido a la fuerte oposición pública. Entre otros elementos

controversiales, la política buscaba el establecimiento de derechos comerciales de uso del agua. En lugar de ser asignados por el Estado, los derechos de agua podían negociarse a través de un sistema basado en el mercado y con poca supervisión pública. Este modelo, que solo se ha establecido en un puñado de Estados, mantiene el agua en manos de los mejores postores en perjuicio de las comunidades locales¹¹. Por ejemplo, en Chile, los mercados del agua han provocado conflictos significativos entre los grandes usuarios corporativos y los usuarios locales de agua. Un fallo de la Corte Suprema en el año 2009 determinó que los mercados de agua de Chile socavaron los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas.¹²

Si bien una mayor cooperación internacional entre el gobierno central y el gobierno sub-nacional puede brindar oportunidades para la creación de capacidades y el intercambio de conocimientos, la tendencia en la política hídrica ha sido hacia asociaciones de políticas corporativas. En lugar de reducir la desigualdad, el modelo P4 promovido por el Banco Mundial en las últimas décadas ha permitido a las empresas dar forma a la política hídrica de una manera que prioriza su acceso por encima de las comunidades locales.

La primera parte de este informe explica por qué la privatización y las asociaciones público-privadas para las políticas amenazan con ampliar las brechas y profundizar las desigualdades en el acceso al agua. La segunda parte del informe examina cómo los derechos humanos al agua y al saneamiento pueden servir como un canal productivo para promover los procesos de implementación de los ODS que combaten el acceso desigual al agua y sus causas.

Las políticas neoliberales del agua se definen en este informe como procesos que permiten la apropiación del agua para la riqueza privada, incluida la privatización de los servicios de agua y saneamiento, la mercantilización del agua en productos como el agua embotellada o la transformación de las fuentes de agua en bienes capitales.

PARTENARIADOS PÚBLICO-PRIVADOS EN LOS ODS

Desde la década de los años noventa, las Instituciones Financieras Internacionales han jugado un papel importante en la promoción de la participación del sector privado en el sector del agua y el saneamiento. Además de promover la prestación de servicios privados y los modelos de financiación a través de condicionamientos en los préstamos, el Banco Mundial ha participado activamente en la formulación de debates sobre políticas hídricas a nivel mundial.

El modelo de Partenariado Público-Privado (P3) generalmente está compuesto por un contrato de 25 a 30 años entre gobiernos y empresas privadas en virtud del cual el socio privado financia, diseña, construye y/u opera algún componente de un servicio público con fines de lucro.¹³ El P4 involucra una gama de actores corporativos fuera de los servicios de agua y saneamiento que buscan un mayor acceso al agua como insumo de producción o como fuente de acumulación de capital. Hay varios P4 en todo el mundo, incluidos el Consejo Mundial del Agua, la Asociación Mundial para el Agua y el Grupo de Recursos Hídricos 2030 que involucran a Instituciones Financieras Internacionales, corporaciones privadas y gobiernos. Incluso el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (SIWI), que se posiciona como una institución de investigación, cuenta entre sus partidarios y contribuyentes a Nestlé y Véolia.

Ambas formas de participación han sido ampliamente promovidas por el Banco Mundial como un medio de implementación de los ODS.

Financiamiento privado

A pesar de afirmar que apoyan a las estrategias basadas en evidencias, los proponentes parecen ignorar la abrumadora evidencia, incluida una investigación propia del Banco Mundial, al enfatizar en la necesidad del financiamiento privado como un medio de implementación para el ODS 6.

En abril del año 2016, a poco menos de un año del lanzamiento de la agenda 2030, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, y el Presidente del Grupo del Banco Mundial, Jim Yong Kim, pusieron en marcha el Panel de Alto Nivel sobre el Agua (HLPW). La iniciativa, compuesta por once Jefes

de Estado y de Gobierno y un Asesor Especial,¹⁴ nació con el mandato de articular una estrategia para la implementación del ODS 6 sobre el acceso al agua. En marzo de 2018, al final de su mandato de dos años, el HLPW produjo un documento final titulado “Que cada gota cuente: Una Agenda para la Acción del Agua”, que contiene recomendaciones para la implementación del ODS 6. Entre sus recomendaciones más importantes, el informe pide “mayores y más efectivas inversiones” en infraestructura de agua y la promoción de alianzas.¹⁵

Además del HLPW, el Banco Mundial y el FMI han promovido activamente la participación del sector privado a través del proceso de Financiación para el Desarrollo (FpD), un proceso paralelo encabezado por las Naciones Unidas que reúne a gobiernos, actores del sector privado e Instituciones Financieras Internacionales para desarrollar mecanismos de financiación para iniciativas de desarrollo. El proceso de FpD relacionado con los ODS cuenta con el respaldo de un Grupo de Trabajo Interinstitucional de Expertos (IATF) que fue convocado en 2015 por el Secretario General de la ONU para guiar las discusiones sobre el financiamiento para la implementación de los ODS. El informe previo no editado del IATF sobre financiamiento en los sectores de agua y energía enfatiza la necesidad de “mecanismos innovadores” para desarrollar la participación del sector privado.¹⁶

Cuando las empresas privadas comenzaron a hacerse cargo de las redes urbanas construidas con fondos públicos, las ganancias privadas solo podían generarse con una considerable subvención pública. Era el sector privado el que dependía del financiamiento público y no al revés.

Al mismo tiempo, un informe de ONU-Agua sobre los medios de implementación para el ODS 6¹⁷ se basa en gran medida en los datos del Banco Mundial para presentar un argumento a favor del financiamiento privado. Su principal fuente de información sobre agua, saneamiento e higiene (WASH por sus siglas en inglés) es el informe Análisis Mundial y Evaluación del Agua Potable y Saneamiento (GLASS por sus siglas en inglés).

El informe GLAAS recopila información de encuestas de los países participantes y lo que denomina “agencias de apoyo externo” que incluye a varios bancos de desarrollo, agencias bilaterales de desarrollo y grandes fundaciones privadas como la Fundación Bill y Melinda Gates (GLAAS 2017). Los datos de los países proceden de diversas agencias nacionales, principalmente de países de ingresos bajos y de ingresos medianos-bajos. A partir de la evidencia producida por este conjunto de datos limitados, ONU-Agua argumenta que el 80% de los países reportan tener financiamiento insuficiente para cumplir con los objetivos de WASH y concluye que las inversiones privadas son vitales para satisfacer estas brechas de financiamiento.

Sin embargo, la historia muestra lo contrario. Cuando las empresas privadas comenzaron a hacerse cargo de las redes urbanas construidas con fondos públicos, las ganancias privadas solo podían generarse con una considerable subvención pública. Era el sector privado el que dependía del financiamiento público y no al revés. Los P3 ejercen una presión mucho mayor sobre el erario público que los servicios de agua y saneamiento financiados y operados públicamente.¹⁸ Cuando la ciudad de París retomó el control del agua en manos públicas en el año 2010, ahorró 35 millones de euros en el primer año y redujo los aranceles en un ocho por ciento.

[...]los P3 han demostrado ser el modelo equivocado. La evidencia muestra que el impulso para generar rendimientos de la inversión ha impedido que las empresas privadas inviertan los altos costos de capital requeridos para expandir las redes a áreas menos rentables.

Por lo tanto, a pesar de décadas de medidas drásticas por parte de las IFIs para promover la participación del sector privado, la financiación pública sigue siendo, con mucho, la mayor fuente de financiamiento para infraestructura de agua y saneamiento, cubriendo más del 90% del sector.¹⁹ Un informe de la Internacional de Servicios Públicos que examina los P3 en las últimas tres décadas en

servicios de agua, energía, ferrocarriles y salud, concluyó que los mismos son “una forma costosa e ineficiente de financiar infraestructura y servicios” y que son incompatibles con los objetivos de proteger el medioambiente y asegurar el acceso universal al agua.²⁰

Esta visión es apoyada en un documento del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES) sobre P3 y la Agenda de ODS, que cuestiona a los P3 como un medio para la implementación de ODS 6: “En general, la evidencia sugiere que los PPP a menudo han tendido a ser más costosos que la alternativa de la contratación pública, mientras que en varios casos no han logrado obtener los beneficios previstos en la calidad de la prestación del servicio.”²¹ Sin embargo, el Banco Mundial continúa defendiendo a los P3 a través de modelos nuevos e innovadores de “financiamiento mixto” que requieren el “impulso de fondos públicos” que al final conduce principalmente a la generación de ingresos para el sector privado²² en lugar de una mejor provisión de agua para las personas.

Si los Estados han de alcanzar la audaz ambición del acceso universal a los servicios de agua y saneamiento, como se establece en el ODS 6, los P3 han demostrado ser el modelo equivocado. La evidencia muestra que el impulso para generar rendimientos de la inversión ha impedido que las empresas privadas inviertan los altos costos de capital requeridos para expandir las redes a áreas menos rentables. En Yakarta, Indonesia, una coalición ciudadana llegó hasta la Corte Suprema en su campaña por reclamar que los servicios de agua y saneamiento vuelvan a manos públicas. En el año 2018, el Tribunal Supremo estuvo de acuerdo en que la privatización había conducido a violaciones de los derechos humanos de los residentes que vivían en barrios pobres y cuyos servicios de agua eran extremadamente inadecuados y anuló los contratos de ambos operadores privados de la ciudad. Los operadores privados - Palyja, una filial local de la multinacional francesa Suez Environment y AETRA, inicialmente adquirida por Thames Water y luego controlada por un consorcio indonesio llamado Acuatico - no cumplieron con los términos de los contratos inicialmente asegurados en el año 1997 bajo la Dictadura de Suharto como parte de un paquete de préstamos del Banco Mundial para

ampliar la red y mejorar el acceso. En Chile, donde la cobertura casi universal del agua se financió con fondos públicos antes de la privatización en el año 1999, las empresas privadas se reservan el derecho de determinar a que áreas darán servicio lo que lleva al nacimiento de una serie de “zonas no rentables” fuera de los centros urbanos.²³

Contrariamente al informe de ONU-Agua, un estudio de la Unidad de Investigación de la Internacional de Servicios Públicos (PSIRU por sus siglas en inglés) en el año 2012 demuestra los mitos del dogma del Banco Mundial a favor del financiamiento directo comercial basado en la recuperación de costos en el Sur Global. A diferencia del informe GLAAS, que se enfoca en países de bajos ingresos, el informe del PSIRU resalta evidencia empírica de países de ingresos bajos, medios y altos que demuestran que las inversiones privadas no han logrado generar fondos significativos, particularmente en el Sur Global. En África, donde las necesidades son mayores, el informe sostiene que las contribuciones privadas son casi nulas. La fuente más importante de financiación en los países africanos de ingresos medios es el sector público y en los países de bajos ingresos es la ayuda de los donantes.²⁴

Las recomendaciones del HLPW y del IATF sobre las reformas para hacer que los servicios sean “solventes” o “financiables” deberían cuestionarse a la luz de esta evidencia. Hacer que una operación sea solvente es crear incentivos para la financiación comercial mediante el establecimiento de mecanismos sólidos que generen ingresos. Por ejemplo, las tarifas al usuario siguen siendo la principal fuente de generación de ingresos. El Banco Mundial recomienda establecer tarifas que “puedan recuperar los costos de operación y mantenimiento y, de ser necesario, puedan financiar cualquier préstamo comercial.”²⁵ Este modelo, de recuperación del total de los costos, permite que las ganancias privadas tengan prioridad sobre las necesidades sociales y los derechos humanos. Los modelos de recuperación total de los costos han tenido impactos devastadores en las partes más empobrecidas del mundo. Un ejemplo de ello son los medidores de agua prepagos activados por crédito adquirido por los usuarios. El reemplazo de las tomas de agua comunales por medidores de agua prepagos en Sudáfrica en el año 2001 provocó un brote de

cólera que afectó a más de 100.000 personas en un país que anteriormente había estado libre de la enfermedad durante décadas. Un tipo diferente de tragedia se produjo cuando estalló un incendio después de la instalación de medidores de prepago en Phiri, uno de los barrios más pobres de Soweto. Los residentes lucharon para apagar el fuego con agua de una zanja después de que su suministro de agua se desconectara automáticamente debido a la falta de crédito. Dos niños pequeños que dormían en una barraca murieron.

Por lo tanto, las reformas que hacen que los servicios públicos sean “solventes” al permitir la recuperación total de los costos son incompatibles con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de acceso universal al agua potable y saneamiento. Las prácticas predatorias asociadas con las reformas neoliberales dirigidas a atraer inversiones privadas han demostrado minar los derechos humanos al agua y al saneamiento de las comunidades pobres y marginadas.

Finalmente, los P3 socavan los compromisos de los ODS relativos a la igualdad de género. Tarifas altas, servicios de mala calidad y la falta de poder de decisión, tienen un impacto desproporcionado en las mujeres que son responsables de administrar las necesidades del hogar. Los estudios demuestran que la privatización ha tenido un tremendo impacto físico y emocional en las mujeres que viven en barrios urbanos marginales en Dhaka y Yakarta.

Hoy, los P3 están en declive con un número creciente de comunidades que se movilizan para revertir la privatización y reclamar el agua en manos públicas. El Instituto Transnacional (TNI por sus siglas en inglés) ha documentado 237 casos de empresas de servicios de agua que volvieron de la propiedad y gestión privada a pública entre el año 2000 y el año 2015.²⁶ Los autores del libro que documenta la remunicipalización mundial, sostienen que los estudios de caso demuestran una tendencia global hacia la propiedad pública como resultado de la insatisfacción generalizada con los P3.²⁷

Dada la abrumadora evidencia contra el financiamiento privado, la implementación de los ODS no debe convertirse en un truco para la renovada presión por un modelo que ha sido tan ampliamente rechazado.

ENFOQUE BASADO EN LOS DERECHOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ODS 6

El derecho humano al agua y al saneamiento se incluyó en el texto de los ODS debido a una persistente campaña de las organizaciones que han estado luchando por la justicia hídrica y que no se dejaron intimidar por la enardecida oposición de Estados poderosos como el Reino Unido y los Estados Unidos. Para los grupos de justicia hídrica como el Proyecto Planeta Azul, quienes tradicionalmente se involucran en asuntos de política hídrica fuera de los corredores tradicionales del poder, la inclusión del lenguaje de los derechos humanos fue una victoria duramente ganada.

Sin embargo, para ser realmente efectivos al luchar contra el acceso desigual al agua, los derechos humanos deben ir más allá del estrecho y delimitado marco de los objetivos e indicadores para combatir las dinámicas de poder subyacentes que producen la injusticia económica y social. Los mecanismos de derechos humanos deben comprometerse con las condiciones macroeconómicas que sirven de barrera para la realización de los derechos humanos. La capacidad de los gobiernos de garantizar el acceso universal al agua potable y al saneamiento, de acuerdo con los criterios normativos de seguridad, asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad y disponibilidad, está determinada por las políticas macroeconómicas que configuran las prioridades fiscales y los poderes reguladores.

Por ejemplo, la proliferación de acuerdos comerciales y tratados de inversión durante la última década ha otorgado a las corporaciones transnacionales mayores poderes para establecer políticas públicas y normatividad. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés) ha observado un fuerte aumento en el uso de mecanismos de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados (ISDS por sus siglas en inglés) a través de los cuales los inversionistas extranjeros han demandado a los gobiernos por cientos de millones de dólares cuando las políticas públicas o medidas regulatorias han infringido los beneficios privados. Los defensores de la inversión privada como una medida para aliviar a los gobiernos con problemas de liquidez deberían considerar el ejemplo de Argentina, que fue demandada más de 40 veces por acciones

tomadas durante la crisis económica a principios de la década del 2000.²⁸ En el año 2015, se ordenó a Argentina pagar a la compañía de agua francesa Suez Environment la suma de 405 millones de dólares americanos por las medidas que se asumieron para recuperar el agua en manos públicas y así proteger a la población frente al desempleo masivo debido a las tarifas.²⁹

Adoptar un enfoque basado en los derechos para implementar el ODS 6 también debería significar luchar contra los abusos del sector privado. Un informe de la organización no gubernamental Mining Working Group, una coalición de grupos de justicia hídrica que lidera el esfuerzo para incluir el derecho humano al agua en el texto de los ODS, argumenta que “en la práctica, el énfasis en los beneficios durante la provisión de servicios básicos resulta en una violación sistemática y predecible de los derechos humanos y privaciones para las poblaciones vulnerables.”³⁰ Como lo demuestra el ejemplo de Yakarta, los mecanismos de derechos humanos pueden utilizarse incluso para revertir efectivamente los esquemas de privatización que colocan las necesidades de los accionistas por encima de quienes son objetos de derechos.

Financiamiento basado en los derechos

Sería importante seguir avanzando para que las estrategias de financiamiento de los ODS se implementen de acuerdo con las normas de derechos humanos en lugar de los criterios destinados a hacer los servicios públicos más atractivos para los inversionistas privados. Los Estados están obligados a garantizar que los servicios de agua y saneamiento sean asequibles. De acuerdo con las normas de derechos humanos, los recursos nacionales deberían movilizarse para garantizar que se extiendan los “máximos recursos disponibles” para garantizar el acceso a los servicios de agua y saneamiento para todos.

El consenso internacional es que los Estados deberían gastar al menos el 1 por ciento del producto interno bruto en agua y saneamiento.³¹ La evidencia empírica sugiere no solo que la gran mayoría de los Estados son capaces de cumplir con este

requisito (Hall y Lobina 2012), sino también que la participación del sector privado supondría una carga mucho mayor para el erario público que los modelos de financiamiento y provisión públicos. La presión para la solvencia plantea una clara amenaza a la capacidad de los gobiernos para ofrecer servicios asequibles de agua potable y saneamiento.

Los esfuerzos de la AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo) también se deben a las obligaciones de los derechos humanos y no a medidas destinadas a empujar fondos públicos para obtener beneficios privados. La AOD no debe actuar como una fusta para presionar a los Estados receptores de ayuda a adoptar los P3.

Partenariados que promueven el derecho humano al agua y al saneamiento

Finalmente, es importante retomar los espacios de cooperación internacional del poder corporativo y crear nuevas plataformas para acuerdos destinados a promover los derechos humanos en lugar de las ganancias corporativas.

A nivel sub-nacional, existe un creciente interés en los partenariados público-públicos (PUP por sus siglas en inglés) como una alternativa a los PPP. La gran mayoría de los operadores de agua en el mundo, 90% de las principales ciudades, están en manos públicas, con una gran diversidad de ejemplos de buenas prácticas e instituciones sólidas. Estos operadores de agua públicos son portadores de un conjunto de experiencias valiosas e ingeniosas. Los PUPs se apoyan en recursos del sector público en sí y son medios rentables, prácticos y de bajo riesgo para apoyar a los operadores públicos y las autoridades locales en la implementación del derecho humano al agua y al saneamiento. Una gran ventaja de los

PUPs es que evitan los riesgos de los partenariados público-privados como los grandes costos de transacción, fallas contractuales, renegociaciones, las complejidades de la regulación, el oportunismo comercial, la fijación de precios monopólicos, el secreto comercial, el riesgo cambiario y la falta de legitimidad pública. Los PUPs claramente tienen un enorme potencial como herramienta para abordar las desigualdades globales en el acceso al agua y al saneamiento.

Al mismo tiempo, los responsables de la toma de decisiones no deben olvidar que su deber principal es con las comunidades a las que sirven. Están obligados a garantizar la participación pública en la toma de decisiones. El principio de “participación” de los derechos humanos requiere que los titulares de las obligaciones garanticen que las comunidades -marginadas más afectadas por las políticas y el desarrollo- tengan todas las oportunidades de participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas, sus medios de subsistencia y su capacidad para disfrutar de sus derechos humanos.

En conclusión, el enfoque para hacer la infraestructura de agua y saneamiento más solvente y rentable responde a los intereses de las empresas privadas y las instituciones financieras internacionales. Son incongruentes con los objetivos del acceso universal al agua y al saneamiento. La promoción de los P3 en la prestación de servicios de agua y saneamiento y una mayor participación de las empresas en los procesos oficiales de formulación de políticas solo amenazan con profundizar las desigualdades en el acceso al agua.

En cambio, los mecanismos de derechos humanos deben desplegarse para contrarrestar las políticas macroeconómicas que producen un acceso desigual al agua y al saneamiento y se deben generar medios de implementación que reduzcan las desigualdades.

Notas

- 1 <https://qz.com/1214249/cape-tower-drought-crisis-coca-cola-bottlers-slammed-for-using-too-much-water/>
- 2 <https://www.economist.com/leaders/2015/03/26/the-169-commandments>
- 3 <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>
- 4 <http://www.un-documents.net/h2o-dub.htm>
- 5 Olleta, A. (2009) "The role of the World Bank in water law reforms" in Water Law for the Twenty-First Century: National and International Aspects Cullet et al. (eds). Routledge
- 6 ibid
- 7 Las corporaciones francesas Suez y Veolia son miembros fundadores del CMA
- 8 <https://www.theguardian.com/world/2017/mar/01/indian-traders-boycott-coca-cola-for-straining-water-resources>
- 9 Barlow, M. (2017) Water Justice groups denounce World Water Forum's "Citizen's Process": <https://canadians.org/blog/water-justice-groups-denounce-world-water-forums-citizens-process>
- 10 See: <http://time.com/4688087/coca-cola-pepsi-boycott-southern-india/>
- 11 Larrain, S. and Schaeffer, C. (2010). Conflicts over water in Chile: Between human rights and market rules: <http://www.chilesustainable.net/wp-content/uploads/2015/06/Conflicts-over-Water-in-Chile.pdf>
- 12 ibid
- 13 Hall, D. (2015) Why public-private partnerships don't work: The many advantages of the public alternative. http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/rapport_eng_56pages_a4_lr.pdf
- 14 Ver la lista completa de países en <http://www.unwater.org/high-level-panel-on-water-outcome-document/>
- 15 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17825HLPW_Outcome.pdf
- 16 https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/IATF%20report%202018_AUV_9Mar2018.pdf
- 17 <http://www.unwater.org/publications/means-implementation-focus-sustainable-development-goals-6-17/>
- 18 Hall, D. (2015) Why public-private partnerships don't work: The many advantages of the public alternative. http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/rapport_eng_56pages_a4_lr.pdf
- 19 http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/rapport_eng_56pages_a4_lr.pdf
- 20 http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/rapport_eng_56pages_a4_lr.pdf
- 21 http://www.un.org/esa/desa/papers/2016/wp148_2016.pdf
- 22 Murray, A. & Spronk, S. (forthcoming) Failing Forward: Canadian International Development Policy, Blended Financing Models and Alternatives.
- 23 https://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/psiru_financing_water_sanitation.pdf
- 24 ibid
- 25 <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25111>
- 26 <https://www.tni.org/en/publication/reclaiming-public-services>
- 27 (ibid)
- 28 <https://www.theguardian.com/global-development/2015/may/21/privatisation-public-services-sustainable-development-investor-state-dispute-settlement>
- 29 <https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-09/suez-wins-405-million-arbitration-ruling-in-argentina-dispute>
- 30 <https://miningwg.files.wordpress.com/2017/03/water-guide-final-pdf.pdf>
- 31 <https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-09/suez-wins-405-million-arbitration-ruling-in-argentina-dispute>



Internacional de Servicios Públicos

45, avenue Voltaire

01210 Ferney-Voltaire - France

www.world-psi.org